

Según Provea

COBRO DE MENSUALIDADES EN USB ES INCONSTITUCIONAL

El cobro de mensualidades instaurado en la Universidad Simón Bolívar, bajo la figura del aporte a un Fondo de Desarrollo Estudiantil, es inconstitucional, pues el artículo 78 de la Constitución de la República establece que la "educación impartida por los institutos oficiales será gratuita en todos sus ciclos". Así lo afirmó Luz Patricia Mejía, una de las abogadas de Provea que se encargó de solicitar el Amparo Constitucional a nombre de más de cien estudiantes de dicha Universidad que se verían en problemas para continuar sus estudios de mantenerse esta medida.

Mejía aclara que el artículo 78 establece también que podrá haber excepciones a la gratuidad de la enseñanza superior cuando que se trate de personas con medios de fortuna, pero aclara que será la Ley la que establezca esas excepciones. En el caso de las Universidades públicas venezolanas, no existe ninguna Ley que establezca o regule dichas excepciones, pues en la Ley de universidades vigente se establece la gratuidad para todos. Según Mejía, la Constitución además aclara que la excepción será el aporte de las personas con medios de fortuna, cuando en el caso de la USB el pago o aporte es obligatorio para todos y la excepción es para quienes demuestran que no pueden pagar.

El Amparo fue admitido, y este miércoles se realizará la audiencia constitucional ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo para que las partes expongan públicamente sus puntos de vista. En el texto del Amparo solicitado por Provea y los estudiantes, se explica que el cobro mensual establecido por la USB viola el artículo 78 de la Constitución de la República, el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y los artículos 2, numeral 1, y 13, ordinal 2, literal c del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, convenios internacionales ratificados por la República y por lo tanto legislación nacional de rango constitucional.

La representante de Provea aclara que el cobro que la Universidad Simón Bolívar pretende hacer a cada uno de los estudiantes que en ella cursan sus estudios universitarios, implica una regresión normativa que vulnera normas internacionales de derechos humanos relativas al derecho a la educación y a la obligación estatal de implementación progresiva de la educación superior gratuita, así como también, la prohibición de no regresividad.

(Caracas, 16.09.1998)